

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 75**  
**O R D I N A R I A**  
**JUEVES 3 DE JULIO DE 2014**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas del jueves tres de julio de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán.

La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTAS**

Se sometieron a consideración los proyectos de actas de las sesiones públicas solemne número setenta y tres y ordinaria número setenta y cuatro, celebradas el martes primero de julio de dos mil catorce.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves tres de julio de dos mil catorce:

**I. 21/2013**

Acción de inconstitucionalidad 21/2013, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales, 171, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Penal, y 275 Bis del Código de Procedimientos Penales, todos del Estado de Nuevo León, reformados mediante Decreto 80, publicado en el Periódico Estatal el diez de julio de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Nuevo León, 171 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, en las porciones indicadas en el considerando quinto, así como del artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, en su integridad, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, en la inteligencia de que dicha declaración de invalidez surtirá a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de*

*Nuevo León y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea realizó la presentación de la propuesta modificada de los numerales 2, 3 y 4 del considerando quinto del proyecto, relativo al estudio de fondo, ajustada con las votaciones alcanzadas y la forma en cómo estas impactan en el análisis.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la discusión en torno al tema 2 “restricción de comunicaciones privadas” del considerando quinto del proyecto, relativo al estudio de fondo.

El señor Ministro Cossío Díaz estimó que, de aprobarse la invalidez total del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, se presentarían algunos problemas, precisando que, respecto del artículo 165 Bis del Código Penal para dicho Estado, relativo a delitos contra la seguridad de la comunidad, el tema ya fue analizado en la Primera Sala, declarándose inconstitucional al haber sido construido ambiguamente y que no fue combatido directamente ni declarado inconstitucional por extensión en la presente acción de inconstitucionalidad y, respecto del diverso artículo 355, párrafo segundo, referente al delito de privación ilegal de la libertad, constituye un delito típicamente local no equiparable ni idéntico al secuestro, por lo que se dejaría al Estado sin la posibilidad de imponer medidas de vigilancia especial.

Por ello, se pronunció por la invalidez de las porciones normativas de dicho artículo 26 que indican “176” y “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que, de acuerdo con el artículo 18 constitucional, existe la posibilidad de determinar restricciones a la comunicación de los inculpadados, salvo lo referente a su defensor, en materia de delincuencia organizada y atendiendo a las circunstancias especiales de los internos, y si la remisión que hace el párrafo cuarto del artículo 26 materia de estudio a los diversos artículos 165 Bis, 176 y 355 del Código Penal para el Estado de Nuevo León no se refieren a la delincuencia organizada, deviene inconstitucional dicha remisión, máxime que ya se determinó que el Congreso local no tiene competencia en ese sentido.

Por otro lado, respecto de la propuesta de eliminar por completo el citado párrafo cuarto del artículo 26, coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz porque su contenido concuerda con la última parte del artículo 18 constitucional, cuando estipula que las medidas restrictivas podrán aplicarse a otros internos por razones especiales.

Por ello, señaló que debería invalidarse la porción normativa de dicho numeral y párrafo que indica “tratándose de cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 165 Bis, 176 o 355 segundo párrafo del Código Penal para el

Estado, así como de los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la autoridad penitenciaria deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”.

El señor Ministro Valls Hernández se pronunció por invalidar, del precepto en estudio, la porción normativa que cita “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor”, no así todo el párrafo cuarto del citado artículo 26, pues no se generaría un nuevo diseño en el sistema penitenciario, como afirma la consulta en su página cincuenta y cuatro.

El señor Ministro Pardo Rebolledo coincidió con la señora Ministra Luna Ramos en lo referente a que las medidas especiales de seguridad están autorizadas por la parte final del artículo 18 constitucional, por lo que la invalidez propuesta no debería abarcar la totalidad del párrafo cuarto del citado artículo 26.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que el proyecto, en un principio, proponía la invalidez de la porción normativa a que ahora han aludido los señores Ministros, pero que la modificó tras recibir comentarios de

otros señores Ministros atinentes a invalidar todo el párrafo cuarto del artículo 26 en comento, por lo que anunció no tener inconveniente en retomar la propuesta original.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó de acuerdo con la propuesta original.

Expresó duda respecto del párrafo cincuenta y cuatro del proyecto circulado el día de ayer y anunció que, de tratarse de una construcción argumentativa alusiva a la falta de competencia, se apartaría del mismo.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea indicó que aclararía lo conducente en el engrose.

El señor Ministro Franco González Salas consultó cuál sería la propuesta concreta del proyecto.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea precisó que se invalidaría del párrafo cuarto del artículo 26 materia de estudio, además de lo ya determinado en votaciones anteriores, la porción normativa que indica “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, lo cual constituía la propuesta original.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en favor de la propuesta actual, sin embargo, estimó que debería incluirse en la invalidez la referencia al artículo 176, pues no se trata de algún supuesto previsto en el artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con la propuesta y, en los términos señalados por los señores Ministros Cossío Díaz y Luna Ramos, en no incluir la última parte del párrafo cuarto del artículo 26.

Indicó que debería eliminarse la referencia al artículo 176 porque implica una cuestión competencial ajena al Congreso del Estado.

Por otra parte, consideró que la restricción de comunicaciones fue legislada en Nuevo León de manera indebida de acuerdo al artículo 18 constitucional, el cual únicamente lo prevé de manera permisiva en cuanto a la imposición de las medidas de vigilancia.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que el párrafo a que hizo alusión el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena debería quedar como en el proyecto original, consistente en que los delitos contenidos en los artículos 165 Bis, 176 y 355, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Nuevo León no son los previstos en el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y, por tanto, el Congreso local tiene facultades para regular la comisión con los internos.

Por lo anterior, expresó duda respecto de cómo quedará la argumentación de dicho párrafo.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea precisó que la argumentación se mantendría como en el proyecto modificado, pero que lo revisaría al momento de

elaborar el engrose con la finalidad de brindarle claridad con base en lo ya votado. Aclaró que, dada la nueva propuesta de invalidez, eliminará el tercer párrafo de la página cincuenta y cuatro del proyecto, que le daba el sustento necesario a la ampliación de invalidez a todo el párrafo cuarto del artículo 26.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que, para él, prevalece la duda manifestada, por lo que estaría al pendiente de la redacción del engrose para, en su caso, realizar alguna observación.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea consultó al señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuál era la parte que solicitó aclarar del párrafo del proyecto al que refirió.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló que debería aclararse que el artículo 18 constitucional permite que las medidas de vigilancia sean para presos distintos a los de delincuencia organizada cuando la ley lo faculta.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que la propuesta original del proyecto consiste en invalidar del párrafo cuarto del artículo 26 las porciones normativas que indican “tratándose de cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 165 Bis, 176 o 355 segundo párrafo del Código Penal para el Estado, así como de los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del



artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” y “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, pues sería coherente con el artículo 18 constitucional, en el entendido de que los citados numerales 165 Bis, 176 y 355, segundo párrafo, no refieren a delitos de delincuencia organizada y, si lo fueran, no son de la competencia del Congreso local.

De ser el caso de aprobarse el proyecto en estos términos, se apartaría de los términos absolutos en la argumentación, siendo suficiente la sola referencia al artículo 18 constitucional.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea recordó que únicamente se invalidaría del artículo 26, párrafo cuarto, en esta nueva propuesta, la porción normativa que enuncia “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, ya que la referencia a los demás artículos del Código Penal del Estado no alcanzó una mayoría suficiente para ser invalidada.

El señor Ministro Cossío Díaz no compartió el punto de vista de la señora Ministra Luna Ramos, pues el artículo 18 constitucional prevé que esta especie de medidas podrán imponerse en los términos que se disponga en la ley, sin que

implique prejuzgar acerca de la calidad de dichas medidas, pues eso no fue materia de esta litis.

Respecto de la referencia al artículo 176 del Código Penal para el Estado, indicó que, de acuerdo a las manifestaciones de algunos señores Ministros, podría alcanzarse una votación calificada para su supresión.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó que no sería adecuada la eliminación, en el párrafo cuarto del artículo 26, de las referencias de los artículos 165 Bis y 355, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado, pues dejaría abierta la posibilidad para que, en cualquier delito, la autoridad pueda imponer estas medidas, lo que no encuadra con la autorización del artículo 18 constitucional.

Recapituló que diversos señores Ministros se han pronunciado por la eliminación de la referencia al artículo 176 y que otros, inclusive, han propuesto la invalidación de dicho artículo, por lo que, de tomarse una votación atinente, estaría de acuerdo con la propuesta del proyecto, además de que debería incluirse esta referencia.

El señor Ministro Aguilar Morales recordó que no se alcanzó una votación suficiente para eliminar el propio artículo 176, mas no se votó respecto de la referencia en el artículo 26 en estudio.

Se pronunció en favor del proyecto, además de la remisión al artículo 176, mas no en la invalidación de dicho

artículo, pues no fue combatido directamente ni podría lograrse por extensión.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que, de eliminarse la referencia al artículo 176, se reviviría el tema de la invalidez, pues se pensaría que debió extenderse en el momento adecuado, en la inteligencia de que suprimir esta remisión resultaría un reconocimiento tácito de que el Estado no tenía facultad para legislar, siendo que ya existe una votación definitiva al respecto.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que no se ha analizado la remisión al artículo 176, pero estimó que podría encuadrar con el concepto de delincuencia organizada. Propuso dividir la votación para que, en primera instancia, se determine si se elimina o no la referencia al artículo 176 y, posteriormente, aprobar o no la propuesta actual.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo la propuesta como la expuso, recordando que la referencia al artículo 176 ya se había votado y que no alcanzó una mayoría calificada.

Estimó como una situación peculiar el anular el reenvío de un artículo y no invalidar el artículo mismo pero que, de existir una mayoría calificada en ese sentido, se adecuaría el engrose. Sin embargo, propuso someter a votación el proyecto en sus términos.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó no existir inconveniente en suprimir las referencias, pues esto se diferencia de extender la invalidez para anular el precepto en sí, pues eliminar la referencia no implica anular el tipo correspondiente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su numeral 2 “restricción de comunicaciones privadas”, consistente en declarar la invalidez del artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, en la porción normativa que indica “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176, Luna Ramos con la invalidez adicional de toda su primera parte, Franco González Salas con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176, Aguilar Morales con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Valls Hernández y Presidente Silva Meza reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea realizó la presentación del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su numeral 3 “prisión preventiva”, en el cual se analizaron los tipos penales a los que se refiere el artículo 171 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León impugnado en relación con los referidos en el artículo 19 constitucional, proponiéndose la invalidez de todos los tipos no previstos por la Constitución Federal. En el proyecto también se propone reconocer la validez del párrafo último del referido artículo 171.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con el proyecto, aunque por razones diversas, ya que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos Barreto Leyva Vs. Venezuela, Bayarri Vs. Argentina, López Álvarez Vs. Honduras y Tibi Vs. Ecuador han determinado los principios de proporcionalidad de la pena, por lo que una prisión preventiva oficiosa anula cualquier posibilidad de proporcionalidad en detrimento del principio pro persona, aclarando que no está a favor de que existen restricciones constitucionales que puedan prevalecer sobre los tratados internacionales.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció en favor del proyecto, apartándose de las citas a las sentencias de carácter internacional, pues no tratan del mismo caso de prisión, para lo cual formulará un voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en

el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su numeral 3 “prisión preventiva”, consistente en declarar la invalidez del artículo 171 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que indican “Rebelión en todas sus modalidades; terrorismo; delincuencia organizada y agrupación delictuosa; contra la seguridad de la comunidad, a que se refiere el Artículo 165 Bis” y “parricidio; privación ilegal de la libertad a que se refiere los artículos 354, 355 y 355 Bis; y robo cometido por métodos violentos, previstos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”, así como reconocer la validez del párrafo último del referido artículo 171, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz en contra de las consideraciones, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas y Valls Hernández reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea realizó la presentación del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su numeral 4 “prueba de ácido desoxirribonucleico”, en el cual se consideró que la medida legislativa del artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues puede extraerse información genética del individuo tales

como ciertos perfiles o rasgos biológicos que no quería hacer públicos, soslayándose la autodeterminación informativa, por lo que se realizó un análisis estricto de proporcionalidad entre el bien jurídico tutelado y el sacrificio de los derechos en juego.

En cuanto al fin, indicó que del procedimiento legislativo se desprende que únicamente se perseguía la creación de la figura de testigo protegido en el proceso penal para cuidar su identidad, en contraste con el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución General, el cual establece que, en casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público deberá garantizar la protección de, entre otros, los testigos.

En relación con el sub principio de adecuación o idoneidad, señaló que se advirtió una disociación entre lo que el procedimiento legislativo adujo como finalidad y el producto normativo, pues dicha finalidad era preservar la identidad de los testigos y resultó que, con la norma, el testigo deberá entregarle al Estado una muestra de material genético con el cual tendrá a disposición los datos más íntimos de su persona.

Por ello, se propone declarar la invalidez integral del citado artículo 275 Bis.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que, al resolver la Primera Sala el amparo en revisión 740/2011, se pronunció en contra del sistema de testigos protegidos en el país, pues

más bien constituiría una figura que denominó “testigos anónimos”, lo que se refleja en el artículo 275 Bis, en el sentido de que no se sabe quién declara en contra del inculpado, por lo que se posicionaría por su invalidez, independientemente del tema del ADN.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con el problema expuesto por el señor Ministro Cossío Díaz, pero la identificación del testigo no necesariamente se puede dar con el ADN, sino por otros medios, por lo que se manifestaría por la interpretación conforme del artículo 275 Bis, en la inteligencia de que, si el testigo está de acuerdo en que se le identifique por este medio, también se le protegería su identidad respecto de la persona a quien está acusando.

El señor Ministro Pérez Dayán precisó que el problema radica en que el artículo 275 Bis establece que la única forma de identificación del testigo es vía la prueba de ADN, por lo que se trata de un sistema invasivo de la persona por más que pudiera advertirse una finalidad positiva de salvaguarda de los individuos, por lo que el propósito de la norma dista mucho del medio propuesto y, dado que éste es desproporcionado, coincidió con su invalidez.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó en favor de la propuesta del proyecto, indicando que el ADN guarda mucha más información que la identificación, como la propensión hacia algunas enfermedades, además de que la norma no establece dónde ni cómo se resguardará la información.



El señor Ministro Aguilar Morales coincidió con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues la norma prevé la prueba de ADN como único medio de identificación, sin pronunciarse sobre la validez o congruencia de dichas pruebas ni sus alcances o condiciones para desarrollarse, por lo que se manifestó en favor del proyecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó que la Constitución Federal únicamente contempla la figura de testigos protegidos para los casos de delincuencia organizada, de lo cual deriva la inconstitucionalidad del artículo 275 Bis.

Indicó que dicho precepto hace referencia al numeral 176 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, por lo que se inclinaría por declararla inválida.

La señora Ministra Luna Ramos expresó que tenía la intención de salvar la constitucionalidad del criterio a través del consentimiento del testigo para realizarse la prueba de ADN, pero que con el argumento del señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestaría en favor de la propuesta, reservándose el derecho a formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea anunció que sostendría el proyecto en sus términos por la disociación entre la justificación del legislador a la medida y lo que la propia norma determinó, sin perjuicio de los comentarios de los señores Ministros, pues podrían enriquecer la argumentación.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su numeral 4 “prueba de ácido desoxirribonucleico”, consistente en declarar la invalidez del artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz con precisiones en cuanto a las consideraciones, Luna Ramos en contra de las consideraciones, Franco González Salas con precisiones en cuanto a las consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con precisiones en cuanto a las consideraciones, Aguilar Morales con precisiones en cuanto a las consideraciones, Valls Hernández con precisiones en cuanto a las consideraciones, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. La señora Ministra Luna Ramos, reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que, con esta votación, el engrose tendría que ajustarse con las consideraciones de la mayoría.

El señor Ministro Presidente Silva Meza señaló que eso se reservaría al momento de la aprobación del engrose, además de que la argumentación mayoritaria es adicional y no desplaza las razones del proyecto, ya que ambas conducen al mismo resultado y abonan al valor del precedente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas con veinte minutos y reanudó la sesión a las trece horas con cuarenta y cinco minutos.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Silva Meza, el secretario general de acuerdos dio lectura a la propuesta del proyecto, contenida en el considerando sexto, relativo a los efectos y, sometida a votación, se aprobó en forma económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza instruyó al secretario general de acuerdos para que diera lectura a los puntos resolutivos que regirán en el presente asunto, quien lo realizó de la siguiente manera:

*“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 171, párrafo último, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que indican “así como de los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los*

*Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” y “deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso de su defensor. También”; 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, en las porciones normativas que indican “Rebelión en todas sus modalidades; terrorismo; delincuencia organizada y agrupación delictuosa; contra la seguridad de la comunidad, a que se refiere el Artículo 165 Bis” y “parricidio; privación ilegal de la libertad a que se refiere los artículos 354, 355 y 355 Bis; y robo cometido por métodos violentos, previstos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, además los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos”; y 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León; declaración de invalidez que surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del*

*Estado de Nuevo León y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes siete de julio de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.